

# Hacia la Democracia Energética

**Debates y conclusiones de un  
taller internacional**

Ámsterdam, 11 y 12 de febrero de 2016



# 1. Democracia energética: ¿modelo, proceso o fantasía?

La energía siempre ha sido un terreno de lucha, en el que las prácticas de uso, distribución y producción se ven determinadas por procesos de confrontación social y política. Larry Lohmann y Nick Hildyard (2014), investigadores de The Cornerhouse, han demostrado que esto sucede incluso con el concepto mismo de 'energía'. La energía, sostienen, se suele entender como un concepto abstracto que alude a una sustancia cuantificable y singular, desvinculada de todo tipo de relaciones sociales y ecológicas. Sin embargo, esta concepción de la energía no es una premisa universal, sino que es fruto del desarrollo de un capitalismo industrial basado en los combustibles fósiles y, por lo tanto, siempre ha servido a los intereses de ciertas élites. Según Lohmann y Hildyard, si la energía se concibe de esa manera, es fácil que el tema de la transición hacia una energía baja en emisiones de carbono se convierta en una cuestión de cómo sustituir los combustibles fósiles por unidades equivalentes de energía 'limpia', con el fin último de mantener el orden establecido. Sin embargo, hay otras formas de pensar sobre la producción y el uso de la energía, y ese es, precisamente, el reto que plantea este informe.

Alrededor del mundo, la gente está recuperando el control sobre la energía, combatiendo la ley del mercado y reinventando nuevas formas de generar, distribuir y usar la energía. Las iniciativas en este campo se articulan en torno a principios que van desde el acceso a la energía a la justicia climática, pasando por la lucha contra las privatizaciones y la defensa de los derechos

*La energía es un bien muy valioso, pero el acceso a ella también debería ser un derecho humano. Si nos limitamos a gestionarla con fines de lucro, será imposible utilizarla para satisfacer las necesidades de las personas. Si a este panorama le añades el hecho de que las grandes empresas están destrozando el planeta y destruyendo nuestro entorno, resulta bastante evidente que necesitamos una gran transformación del sistema energético global. Si pretendemos cubrir las necesidades sociales y proteger el planeta, debemos arrebatárselo de las manos a quienes simplemente están tratando de exprimirlo para ganar más dinero.*

**Nick Dearden (Global Justice Now)**

de la clase trabajadora. Para muchos de los movimientos implicados en las luchas en torno a la energía, el concepto de democracia energética está resultando cada vez más útil como un medio para aglutinar causas dispares pero claramente interrelacionadas en un mismo discurso compartido, avanzando hacia la construcción de una agenda común.

La democracia energética no tiene una definición unívoca. Sin duda, el término evoca el anhelo de un control colectivo sobre el sector, en contraposición a la cultura neoliberal dominante de la comercialización, la individualización y el control empresarial. La democracia energética aspira a poner en manos de los usuarios y los trabajadores de la energía el poder sobre todos los aspectos del sector, desde la producción a la distribución y desde el suministro hasta la financiación, la tecnología y la producción de conocimientos. Los movimientos que están desplegando el concepto de democracia energética también reivindican un sistema de

energía socialmente justo, entendido como un sistema de acceso universal, con tarifas asequibles para todos los usuarios y con puestos de trabajo seguros, sindicalizados y bien remunerados. Proponen construir un sistema de energía que funcione en el interés público y en el que primen los objetivos sociales y ambientales por encima del ánimo de lucro. Y persiguen una transición en las fuentes de generación, proyectando, en última instancia, un mundo impulsado totalmente por fuentes renovables.

Partiendo de esta base, se han dado varios intentos de ofrecer una definición precisa de la democracia energética. Así lo han hecho, por ejemplo, el

movimiento alemán por la justicia climática y la iniciativa Sindicatos por la Democracia Energética (Angel, 2016). Sus definiciones proporcionan un modelo para el desarrollo futuro del sector energético; alimentado por renovables, controlado de forma colectiva, con una filosofía inspirada en la justicia social y con una vocación de interés público.

Sin duda, existen buenos motivos para acometer la tarea de elaborar una definición compartida, ya que esta podría ofrecer una dirección clara para orientar la lucha, así como un marco para criticar los proyectos que utilizan el término simplemente apropiándose de él o diluyéndolo. A pesar de ello, puede que plantear la democracia energética como un objetivo final bien definido a lograr en el futuro tenga sus limitaciones. En opinión del teórico político Timothy Mitchell (2011), la imposición imperialista del ideal occidental de la democracia liberal sobre el resto del mundo se explica porque la democracia ha sido entendida como un conjunto prediseñado de principios y estructuras que se pueden exportar a todos los países, independientemente de su contexto histórico y geográfico. Cuando pensamos en la democracia con respecto a la energía, debemos evitar este tipo de conceptos fetiche y admitir que, probablemente, lo que funciona en las zonas rurales de Laos sea muy diferente de lo que funciona en la ciudad de Londres.

En efecto, mientras que el concepto de democracia energética ha ido ganando terreno y se ha hecho un hueco notable en los debates en Europa Occidental y en los Estados Unidos, hasta la fecha no ha gozado de mucha popularidad ni relevancia en el Sur Global, donde son más habituales ideas como la soberanía energética y la justicia energética. Así pues, existe un riesgo real de que la democracia energética se convierta en una agenda eurocéntrica y, por este motivo, los y las activistas europeos deberían evitar con suma cautela cualquier intento de imponer la concepción de la democracia energética en el Sur Global. La pregunta que se debería formular, más bien, es cómo conseguir que el imaginario de la democracia energética sea de interés para los problemas y las prioridades de las luchas en el Sur Global, de modo que quienes desplieguen el concepto puedan cultivar la solidaridad, y que el concepto sea más útil para las luchas del Sur en caso de que sus propios activistas decidan que desean explorar posibles vías para utilizarlo o adaptarlo.

Los activistas de Europa y otras regiones del Norte también pueden enriquecer sus luchas aprendiendo de las perspectivas de la justicia y la soberanía energética utilizadas en el Sur Global, y ahondando sus conocimientos al respecto.

Para el activista e investigador Kolya Abramsky, la democracia energética – entendida como una visión abstracta del futuro desarrollo del sector de la energía– es “una fantasía”. El equilibrio de poder existente en el capitalismo neoliberal es profundamente antidemocrático. Por lo tanto, toda transición energética emancipadora requeriría una transformación fundamental de la geometría del poder actual y, como tal, exigiría una estrategia política concreta y ambiciosa sobre cómo se podría alcanzar este tipo de transformación. Así, puede que la cuestión más apremiante no pase por cuáles serían las características exactas de una futura utopía energética, sino, más bien, cómo podemos construir poder y organización colectivos.

Si deseamos situar estas cuestiones políticas en un primer plano, puede que lo más productivo sea concebir la democracia energética como un proceso de democratización en curso. Entendida así, la democracia energética se convierte en una cuestión de cómo organizarse para crear unos arreglos energéticos más justos socialmente, sostenibles y controlados colectivamente en el marco de las circunstancias históricas y geográficas que vivimos.

Concebida así, la democracia energética deja de ser una utopía que se debe alcanzar en el futuro y pasa a ser, más bien, una lucha continua o, más exactamente, una serie de múltiples luchas continuas en torno a quién posee y controla la energía, y cómo, dónde y para quién se produce y se consume.

Puede que la manera de avanzar consista en mantener un movimiento fluido y un diálogo constante entre estos planteamientos divergentes de la democracia energética, como modelo y como proceso. Y es que del mismo modo que las luchas deben guiarse por una idea de qué tipo de sector energético queremos, una visión detallada de un futuro sector carece de utilidad sin estrategias concretas para alcanzar ese futuro. Este informe bebe de ese espíritu y examina estas diversas cuestiones con el objetivo de contribuir a los debates sobre por qué debemos luchar y cómo ganar nuestras luchas.

## 2. La democracia energética y la ciudad

Teniendo en cuenta que la mayoría de la población mundial vive en ciudades, la escala urbana se presenta cada vez más como un espacio fundamental para la acción contra el cambio climático y las transiciones hacia la

sostenibilidad. En efecto, la ciudad se está convirtiendo en un ámbito importante para el despliegue de la democracia energética. La creación de servicios de energía municipales de propiedad pública es uno de los pilares clave de la agenda política desarrollada por las plataformas ciudadanas que han llegado a los gobiernos locales en diversos países, por ejemplo en España. Los proyectos municipales que se están elaborando gozan de un amplio abanico de experiencias interesantes de otros lugares en las que basarse.

Nick Buxton, del Transnational Institute, explicó que, a pesar del dominio y el poder que ostentan los servicios que son propiedad de inversores privados en los Estados Unidos, aproximadamente 40 millones de personas en este país son abastecidas por servicios públicos de propiedad municipal o por cooperativas eléctricas. Y en muchas ciudades sin empresas públicas, se observa una demanda creciente de servicios centrados en una mayor responsabilidad democrática y más energías renovables que está planteando un fuerte desafío político a la energía privatizada. Entre otras iniciativas:

- La New York Energy Democracy Alliance reúne a varias organizaciones de base y comunitarias para hacer frente a la nueva Visión de la Energía de la ciudad, con el objetivo de impedir un plan que pretende promover la energía solar descentralizada, pero que otorga el control a empresas privadas. Frente a ese proyecto, la alianza reivindica un

*Si no hablamos de forma explícita y decimos 'queremos un sistema energético que trascienda el neoliberalismo', seguiremos moviéndonos en el mismo terreno de juego.*

*En ese caso, nos decantaremos por las opciones más fáciles, es decir, por lo que parece que capta inversiones. Nos enfrentamos siempre a la gran pregunta: ¿Cómo podemos conseguir inversiones para energía eólica en alta mar? ¿Cómo podemos conseguir inversiones para paneles solares? Si no pensamos en las estructuras políticas que estamos creando cuando instalamos paneles solares y cuando obtenemos la inversión, nos quedamos atrapados en el espacio neoliberal.*

**Mika Minio-Palluelo (Platform London)**

poder público democrático, participación comunitaria y medidas para garantizar la justicia social, exigiendo que ningún ciudadano destine al pago de la energía más del 6 por ciento de sus ingresos.

- En 2011, la ciudadanía de Boulder, en el estado de Colorado, votó a favor de que la ciudad rompiera sus lazos con la compañía privada Xcel y creara su propio servicio público y democráticamente responsable. En lo que fue un clásico episodio de la hormiga contra el elefante, la organización juvenil New Era Colorado consiguió derrotar a Xcel, que se gastó un millón de dólares en la campaña opositora. A pesar de este primer éxito –y de otra derrota de Xcel en una demanda posterior ante los tribunales–, Xcel se niega a darse por vencida y está estudiando otras vías jurídicas para impedir el funcionamiento de la nueva empresa pública de servicios.
- La campaña Our Power está activa en seis ciudades –San Antonio, Texas; Jackson, Mississippi; Eastern Kentucky, Kentucky; Black Mesa, Arizona; Detroit, Michigan; y Richmond, California– y reivindica una transición justa hacia una economía basada en una energía limpia y democrática. La campaña colabora con sindicatos, grupos indígenas y otras organizaciones que trabajan por la justicia racial y social, y aboga por la democracia energética con el objetivo de garantizar el control sobre la tierra, el agua y los alimentos.

En Europa también se evidencia un espíritu parecido de democracia energética local. En Berlín, Berliner Energietisch reunió a una alianza de más de cincuenta grupos –desde ecologistas a grupos que trabajan en el ámbito de la vivienda– para promover un referendo sobre sus demandas para remunicipalizar la red de distribución y crear una empresa de servicios pública y democrática. Stefan Taschner, portavoz de la campaña, explicó que la iniciativa se basaba en tres principios fundamentales:

1. *Energía limpia*: la empresa debería operar con un 100 por cien de energía renovable.
2. *Justicia social*: la empresa debería asumir el compromiso de asegurar tarifas asequibles y luchar contra la pobreza energética.
3. *Democracia*: la empresa debería ser propiedad del Estado a escala local, pero estar controlada por mecanismos y principios de democracia participativa como, por ejemplo: i) miembros de la junta elegidos entre la ciudadanía; ii) asambleas asesoras de barrio; iii) total transparencia; iv) la posibilidad de solicitar a la junta que tenga en cuenta los temas que más preocupan al público.

A pesar de que la campaña logró la notable proeza de reunir las 200.000 firmas en papel necesarias para forzar el referendo, y de ganarlo con una mayoría del 83 por ciento –más de 600.000 votos–, fue finalmente derrotada por un estrecho margen, al no alcanzar el quórum de votantes por apenas 21.000 votos. Esta derrota llegó de la mano del gobierno estatal, que cambió la fecha del referendo para que no coincidiera con las elecciones generales y se celebrara, en cambio, en un día aislado, con el objetivo de limitar la participación.

No obstante, la campaña triunfó en muchos aspectos. Y es que, por una parte, arrancó una concesión al gobierno del estado –el establecimiento de una

empresa de energía limpia de pequeña escala- y, por la otra, mejoró notablemente la concienciación sobre los temas de democracia energética en la ciudad y en otros lugares.

De hecho, los intercambios con Berliner Energietisch fueron una gran influencia en la decisión de crear Switched On London, una campaña que aboga por una empresa de energía pública y democrática en Londres, impulsada por activistas de grupos como Platform, Fuel Poverty Action y Global Justice Now, y grandes sindicatos como Unison y el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS). Switched On London ha surgido en el contexto de un creciente interés en las iniciativas de energía municipales en el Reino Unido, donde ciudades como Nottingham y Bristol han creado recientemente sus propias empresas públicas de suministro como una alternativa asequible y limpia al sector privado.

En la capital británica, la Autoridad del Gran Londres ha estado impulsando una asociación público-privada con RWE nPower, cuyo objetivo ha sido abastecer de energía local y baja en emisiones de carbono a grandes consumidores institucionales, como el metro y la policía. Switched on London se muestra crítica con la poca ambición de este programa en lo que se refiere a una transición hacia una economía baja en carbono y superadora de la pobreza energética, así como el hecho de que RWE nPower se beneficiará a costa de los contribuyentes. En efecto, las ciudades están empezando a organizar este tipo de asociaciones público-privadas de energía en todo el Reino Unido, con lo que se corre el riesgo de que las empresas privadas se apropien de la agenda municipal en este ámbito. Parte del planteamiento en que se basa Switched On London consiste en impulsar las propuestas energéticas municipales emergentes hacia una dirección más progresista, de forma que las iniciativas resultantes sean más ambiciosas con respecto a una transición hacia la energía limpia y la pobreza energética, sean totalmente públicas y estén controladas democráticamente, y no estén asociadas con el sector privado.

Las demandas de Switched On London se inspiran en gran medida en la propuesta de Berliner Energietisch, como su proyecto para la gobernanza democrática de la empresa pública. Sin embargo, a diferencia de la alianza alemana, la atención de Switched On London se centra únicamente en la creación de una nueva empresa pública de servicios, sin una propuesta concreta sobre cómo se podría remunicipalizar la red de distribución de la ciudad. Mientras que Berliner Energietisch aprovechó la ocasión que ofrecía el vencimiento del contrato de la red de distribución que mantenía la ciudad con la compañía Vattenfall, en el Reino Unido los contratos de la red no son concesiones, por lo que recuperar la propiedad o la gestión es más difícil. Además, Switched On London no puede promover un referendo ciudadano y, por lo tanto, deberá encontrar otras herramientas de presión. La campaña empezó a intensificar su actividad en el período previo a las elecciones municipales de Londres de mayo de 2016, utilizando este acontecimiento político como un medio para darse a conocer e introducir en el discurso público la idea de una empresa de energía pública y democrática. La campaña contribuyó a que el Partido Verde apoyara la idea de una empresa de energía de propiedad pública para potenciar inversiones que den lugar a bajas emisiones de carbono y que rebajen el gasto en combustible de los habitantes de Londres, aunque los Verdes no se pronunciaron sobre la cuestión de la

gobernanza democrática de la empresa. Mientras tanto, el candidato del Partido Laborista a la alcaldía, Sadiq Khan (que finalmente salió elegido), se comprometió a establecer una empresa pública para impulsar la nueva capacidad de generación de energía, aunque se mostró ambiguo sobre si esa

*Vemos la energía pública municipal como una forma de hacer frente al reto de la escala en la democracia energética. Entre las comunidades que están intentando recuperar su propia electricidad a través de pequeñas instalaciones de renovables hay lugar para el optimismo. Pero se trata de una realidad minúscula, mientras que los desafíos que entraña acabar con las emisiones de carbono y proporcionar energía a precios asequibles son enormes. Por lo tanto, vemos la energía municipal como algo que puede salvar la brecha entre esos tremendos desafíos y las respuestas descentralizadas y de pequeña escala.*

**Anna Galkina (Switched on London)**

empresa lucharía contra la pobreza energética ofreciendo un suministro a precios asequibles a los hogares de la ciudad. Switched On London prevé seguir haciendo campaña y ejerciendo presión sobre los políticos locales, a la vez que construye nuevas alianzas y gana más aliados, creando vínculos con otras luchas urbanas.

Como sucede con la política nacional, los intentos de proyectar una transición energética emancipadora en la ciudad está plagados de complejidades y contradicciones. Es evidente que los gobiernos municipales forman parte del Estado y que, como tales, se constituyen a través de los mismos procesos de confrontación y lucha (véase el apartado 3). Así, pese a que los esfuerzos para construir una democracia energética urbana han conseguido un impresionante apoyo popular y han propiciado importantes

concesiones por parte del Estado en el plano local, las luchas urbanas por la energía también se han topado con una fuerte resistencia, tanto del Estado como del capital privado, y ya sea en Boulder como en Berlín.

Pese a todo, existe un buen motivo para seguir persiguiendo la democracia energética en nuestras ciudades. Para empezar, la escala de lo urbano tiene sentido, ya que está lo suficientemente cerca de las comunidades locales como para rendir cuentas, sin correr el riesgo de llegar a ser demasiado grande como para no garantizar el control, como ha ocurrido con servicios públicos estatales como Eskom en Sudáfrica y Vattenfall en Suecia. Además, la impresionante construcción de alianzas en Berlín y Londres sugiere que la ciudad podría ser un lugar fructífero para la formación de solidaridades fructíferas entre distintas luchas. Si bien la urbanización siempre ha desempeñado un papel central en el desarrollo capitalista, las ciudades también han sido lugares clave de resistencias y alternativas progresistas. Y puede que esto sea así hoy más que nunca. Ya sea a través de los movimientos contra la gentrificación, las luchas por la vivienda y el transporte asequible, o las plataformas ciudadanas que están tomando el poder en varias ciudades de España, alrededor del mundo la gente está reclamando el *derecho a la ciudad* (Harvey, 2012); es decir, el derecho a vivir bien en la ciudad y a participar plenamente en la gestión de los espacios urbanos que habitamos. Situar la democracia energética como uno de los aspectos de este anhelo más general de retomar el control sobre el entorno urbano podría ser una manera prometedora de seguir avanzando.

### 3. La democracia energética y el Estado

Para Nick Dearden, director de Global Justice Now, la atracción inicial que suscitó la idea de la democracia energética se explica a raíz de la desconfianza generalizada que sentía la izquierda tanto ante el mercado como ante el Estado. Después de los fracasos del socialismo autoritario en el siglo XX –y del creciente grado en que, desde los orígenes del neoliberalismo, el Estado se ha



rendido a los dictados del capital transnacional-, en los últimos años muchas personas de la izquierda han ido renunciando al Estado como un espacio de lucha. Consecuencia de ello es, entre otras cosas, que se haya incrementado el interés en las pequeñas organizaciones no estatales que aspiran a construir una sociedad alternativa. En este sentido, es entendible que, en la forma en que había sido concebida inicialmente, el concepto de democracia energética se asociara principalmente con las cooperativas comunitarias de energía que estaban operando en el plano local.

Sin embargo, resulta destacable que la orientación no estatal de la agenda de la democracia energética ya se haya desplazado. Aunque la proliferación de cooperativas de energía en todo el mundo ha sido impresionante -y las cooperativas podrían ciertamente desempeñar un papel vital en la construcción de la democracia energética-, también se han puesto de manifiesto sus limitaciones. Al menos en Europa, estas iniciativas han tenido,

*Durante las últimas cuatro décadas, la gente se ha ido volviendo cada vez más desconfiada del Estado porque ve la forma en que los gobiernos actúan en connivencia con las grandes empresas para arrebatarnos el poder y hacer funcionar nuestras sociedades como si fueran mercancías con las que lucrarse. Por lo tanto, debemos afrontar la cuestión del Estado con cierto escepticismo. Pero eso no significa que el Estado carezca de papel alguno. De hecho, es absolutamente necesario que usemos el poder político colectivo a través del Estado para facilitar que las personas puedan acceder a la energía en la escala que necesitamos en estos momentos. Pero no basta con decir 'de acuerdo, dejaremos este tema en manos del Gobierno'. Debemos perseverar en la lucha. Las cooperativas pueden desempeñar un papel muy importante, ya que aportan un espacio en el que las personas pueden unirse y proclamar 'no importa lo que haga el Estado; nosotros intentaremos hacerlo por nuestra cuenta'. Así pues, será un proceso complejo, en el que la gente participará en la dinámica política e interactuará con el Estado, pero al mismo tiempo mantendrá una distancia del proceso político. Hemos visto que este tipo de estrategias en América Latina han generado algunos resultados increíbles en cuanto al incremento en el acceso. Y esto fue gracias a una confluencia en la acción de movimientos y gobiernos progresistas.*

**Nick Dearden (Global Justice Now)**

en muchas ocasiones, un cierto carácter exclusivo, solo accesible a las clases medias. Además, irónicamente, han resultado dependientes de los caprichos del Estado; en el Reino Unido, por ejemplo, el próspero sector de la energía comunitaria quedó pulverizado por la decisión del Gobierno de reducir los subsidios a las FIT (feed-in-tariffs). Mientras tanto, pensando más allá del sector de la energía, el 'giro electoral' que ha dado la izquierda europea -de Grecia a España, pasando por el Reino Unido- ha suscitado un interés renovado en las posibilidades (y contradicciones) abiertas por la lucha en el ámbito del Estado. En consecuencia, las ideas y las prácticas de la democracia energética han comenzado a trascender el enfoque de micro-escala, enfrentándose a escalas mayores y a la cuestión, cada vez más espinosa, del poder del Estado. Este parece ser un cambio positivo para poder ir más allá de las reformas parciales y conseguir una transformación del sector de la energía en su conjunto.

Así pues, ¿qué sabemos del Estado con respecto al lugar que ocupa en la construcción de la democracia energética? Los experimentos de transición hacia energías renovables impulsados por el Estado en América Latina brindan un buen ejemplo para empezar a reflexionar sobre este tema. En Uruguay, después de diez años de planificación estatal selectiva por parte de un Gobierno de izquierda, se ha producido una transición, y el sector, que en su día dependía del petróleo importado, ahora se caracteriza por las energías renovables, que representan el 94 por ciento de la matriz eléctrica y el 55 por ciento de la matriz energética del país. En diez años, Uruguay pasó de no tener ni un solo megavatio de energía eólica a contar con el mayor porcentaje de penetración eólica en su matriz energética en todo el mundo. Esta transición, además, ha brindado a la población un acceso a la energía

prácticamente universal. Todo esto se ha logrado con políticas de largo plazo, respaldadas por todos los partidos políticos, y con un marco jurídico, normativo e institucional adecuado.

El conjunto del proceso ha estado liderado por UTE, una empresa de propiedad estatal (Casaravilla, 2014). Siguiendo una estrategia parecida, en Costa Rica, las energías renovables ocupan el 79 por ciento de la matriz energética y el 99 por ciento de la matriz eléctrica, y el acceso a la energía es casi universal. En este país, el 85 por ciento de la generación de energía depende de instituciones públicas, mientras que las cooperativas y las empresas municipales participan tanto en la generación como en la distribución.

Estos dos casos ponen de manifiesto el potencial de la planificación estatal y las instituciones públicas para impulsar transiciones rápidas hacia la energía limpia y el acceso universal. Sin embargo, tampoco se deben idealizar en exceso. Aunque tanto en Uruguay como en Costa Rica el Estado ha desempeñado un papel de liderazgo, gran parte de la infraestructura ha sido construida por compañías extranjeras, deslocalizando puestos de trabajo y limitando la posibilidad de efectos multiplicadores más positivos en la economía nacional. Por otro lado, si bien las credenciales democráticas de una transición articulada mediante una planificación estatal verticalista son mejores que las que ofrecen las compañías privadas, a las que nadie ha elegido y que no deben rendir cuentas, en ninguno de los dos casos se destaca la participación popular en la gestión del sector.

En el caso de Uruguay, ahora se teme que los impresionantes logros alcanzados por el país no se sostengan: las compañías Total, Exxon y Statoil, en colaboración con ANCAP, la empresa estatal uruguaya de refinado de petróleo, han estado realizando perforaciones exploratorias y parece probable que encuentren reservas de hidrocarburos. Es imposible predecir qué ocurrirá con el perfil verde de la energía (y la economía) del país si esas reservas resultan ser comercialmente rentables.

Así pues, estos ejemplos de América Latina ilustran las posibilidades y los desafíos de la democracia energética por medio del Estado. Los teóricos hace tiempo que sostienen que debemos entender el Estado como el producto de una lucha continua. Las instituciones estatales están profundamente arraigadas en las relaciones sociales de dominación y opresión, desde el capitalismo al colonialismo y el patriarcado. Por lo tanto, el Estado muchas veces frustrará los esfuerzos que apuntan hacia un cambio emancipador. Sin embargo, el Estado no es un mero instrumento de la clase dominante; si bien está estructuralmente sesgado en favor de la reproducción del orden establecido, la lucha desde dentro y fuera del Estado puede modificar su forma y función. En consecuencia, el Estado es dinámico e internamente contradictorio, y las instituciones estatales son fruto de una serie de procesos que se crean y recrean constantemente (Jessop, 1982).

La experiencia reciente de Grecia esclarece hasta qué punto se han transformado en las últimas décadas los procesos que constituyen el Estado. En la experiencia de Syriza, el poder ya no opera, esencialmente, en el ámbito del Estado nacional, sino más bien en el nivel supranacional, a través de las instituciones del capital global; en este caso, la Troika neoliberal (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea).

Esto no significa que el Estado haya perdido su relevancia ni que se deba aceptar que el actual reparto de poderes sea fijo o estable. Sin embargo, en lo que atañe a la democracia energética, se plantean varias preguntas. La más obvia es qué tipo de estrategias políticas podrían empujar al Estado en la dirección de una transición energética emancipadora, sobre todo cuando el equilibrio de poder global se inclina con tanta fuerza en la dirección contraria. Y en los casos en los que se consiga llevar adelante esa transición emancipadora a través del Estado, cómo defenderla ante las fuerzas que deseen neutralizarla.

## 4. ¿Energía para qué y para quién?

Para el activista e investigador venezolano Edgardo Lander, los debates en torno a la democracia energética deben comenzar con la pregunta de ¿energía para qué y para quién? Y ahondando en la cuestión: ¿Quién se beneficia de los proyectos de energía y quién sale perdiendo? ¿A qué intereses sirven? ¿Qué conocimientos se valoran? La historia reciente de los proyectos de energía en el Sur Global está estrechamente relacionada con la imposición colonial de un modelo de desarrollo capitalista y de políticas neoliberales de ajuste estructural. Y los beneficiarios han sido, por supuesto, el gran capital, las grandes empresas transnacionales y las instituciones financieras, en detrimento de innumerables vidas y medios de sustento.

En América Latina, algunos proyectos desarrollistas destructivos han intentado aumentar su legitimidad desplegando el discurso de la 'soberanía energética'. Si bien este término también es utilizado por los movimientos sociales que luchan por el autogobierno y la resistencia al colonialismo, los gobiernos se han apropiado de él para alinearlos más con la soberanía nacional. Este discurso ha sido usado principalmente para imponer megaproyectos como grandes hidroeléctricas, con el argumento de que estas grandes obras son de interés nacional, sofocando así las inquietudes del número relativamente pequeño de indígenas que saldrán perdiendo. A pesar de estos nuevos proyectos, el acceso a la energía sigue siendo un gran problema en una región donde 23,2 millones de personas carecen de acceso a la electricidad. Haití sigue siendo un caso extremo, ya que solo el 29 por ciento de la población (concentrada en su mayoría en la zona metropolitana de Puerto Príncipe) goza de acceso a la electricidad. Los casos de Costa Rica y Uruguay son, pues, en gran medida excepcionales. La desigualdad energética se podría ver exacerbada en países como la Argentina, donde el giro a la derecha en el gobierno ha significado un aumento en el precio de la energía de hasta el 750 por ciento.

El activista e investigador Benny Kuruvilla explicó que la India se está convirtiendo en un líder emergente en el campo de las energías renovables. El país es el quinto mayor productor de energía eólica del mundo y el Gobierno prevé instalar 175 gigavatios de nueva capacidad de renovables para el año 2022, con un incremento proyectado del 400 por ciento en la capacidad de energía solar para 2017. No obstante, en paralelo a estos planes, se proyectan 400 nuevas centrales eléctricas de carbón y varias centrales nucleares, incluida la que será la mayor planta nuclear del mundo en Jaitapur, donde miles de pescadores perderán sus medios de vida. Por otra parte, está la cuestión de quién se beneficiará con estos nuevos proyectos, que están

encabezados principalmente por el sector privado. Actualmente, el 33 por ciento de los hogares –alrededor de 400 millones de personas– no dispone de acceso a la electricidad. Las desigualdades en este sentido son muy acentuadas: el 20 por ciento más pobre de la población representa solo el 5 por ciento del consumo nacional de energía, mientras que el 20 por ciento más rico representa el 80 por ciento de dicho consumo.

En lo que se refiere a Asia, Dorothy Guerrero explicó que China es ahora el principal inversor en energías renovables y el mayor fabricante de sistemas de energía solar del mundo, y que tiene el objetivo de un 20 por ciento de energía renovable en su matriz energética para el año 2030. En la actualidad, las renovables representan solamente el 1 por ciento de la matriz energética del país, que está dominada por el carbón (66 por ciento) y el petróleo (20 por ciento). Sin embargo, China ha ido aumentando de forma gradual su asignación presupuestaria a las energías renovables. En 2014, invirtió en ellas 89.500 millones de dólares y, en 2013, 60.800 millones, unas cifras que superan las de sus inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear. China prevé invertir un total de 6,6 billones de dólares para reconfigurar su matriz energética y desarrollar nuevas fuentes de energía. El país depende de la planificación estatal para dirigir la transición hacia la energía limpia y reducir más las emisiones de gases de efecto invernadero.

David Boys, de la federación sindical internacional ISP, explicó que ahora China parece ser consciente de los peligros sociales que entraña la contaminación masiva y extrema causada por su matriz energética y de producción.

Filipinas está pasando a ser un lugar clave de lucha en torno a la energía, ya que el gobierno prevé que entre en funcionamiento una nueva generación de 23 centrales eléctricas de carbón de aquí a 2030. Una vez más, cabe preguntarse qué intereses representan estos grandes proyectos energéticos. En Tailandia, se está utilizando la energía de grandes hidroeléctricas para dar servicio a los centros comerciales, y las emisiones en Bangkok han alcanzado ahora el mismo nivel que las de Manhattan. Laos, por su parte, aspira a convertirse en ‘la batería’ de la región y abandonar su calificación como ‘país menos desarrollado’, vendiendo grandes extensiones de bosques para biocombustibles y construyendo grandes represas hidroeléctricas para vender energía a los países vecinos.

En Sudáfrica se detecta un patrón parecido de inversión privada a gran escala, tanto en nuevas energías renovables como en combustibles fósiles. Mientras que las empresas transnacionales obtienen beneficios extraordinarios, los barrios populares de las ciudades del país se enfrentan a cortes de energía, apagones y facturas más caras.

Si bien las cuestiones del acceso y la pobreza se hallan ahora en el centro del proyecto sobre democracia energética, se ha prestado poca atención al tema de qué energía se debe generar para qué tipo de estilos de vida y patrones de consumo, y qué relaciones con la naturaleza deseamos promover. Estos aspectos deben abordarse, y las respuestas se encontrarán aprendiendo de quienes se encuentran en la primera línea de la resistencia a las prácticas desarrollistas colonialistas, en el Sur Global.

En el Reino Unido, el colectivo Platform, dedicado a la investigación y a la

organización de campañas, ha planteado la cuestión de cómo la democracia energética podría promover prácticas de solidaridad. Por ejemplo, ¿sería posible que los activistas del Reino Unido presionaran a los ayuntamientos para que los fondos de pensiones dejen de invertir en combustibles fósiles e inviertan ese dinero en apoyar proyectos de energía limpia emancipadores en el Sur, definidos y controlados por los usuarios y los trabajadores?

## 5. El mundo del trabajo y una transición justa

Los trabajadores del sector de la energía ocupan una posición estratégica vital. Dado que la infraestructura energética constituye uno de los pilares centrales de la economía capitalista, la acción industrial destinada a esta

*La energía es una cuestión capital para los trabajadores porque es un insumo esencial para la producción. La energía también determina en gran medida la vida de la gente común. Sin energía, no puede haber producción, y sin energía la gente no puede llevar una vida digna y plena. Por lo tanto, es un insumo clave a la hora de conformar qué pueden hacer las personas y cómo viven, y la falta de energía representa una forma de desigualdad y falta de democracia. En nuestro país, donde teníamos un sistema de profundas desigualdades, estas se extendían también al acceso a la energía. Históricamente, la energía se ha producido para dar servicio a las minas y algunas grandes industrias, mientras que muchas personas han carecido de acceso a la electricidad. La energía siempre ha sido un asunto político en Sudáfrica.*

**Dinga Sikwebu (NUMSA/United Front)**

infraestructura ha creado la fuerza necesaria para ganar muchas de las victorias progresistas más celebradas de la historia reciente. Sin embargo, el dilema con la democracia energética es que es poco probable que los trabajadores deseen acabar con sus propios medios de vida promoviendo el fin de los combustibles fósiles. La respuesta a este dilema, tanto desde el movimiento obrero como desde otros grupos, ha pasado por lo general por reivindicar una 'transición justa', es decir, un giro hacia una economía baja en emisiones de carbono que garantice un trato justo a los trabajadores, y proporcione empleos seguros y dignos.

En este sentido, la creación de la iniciativa Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) representa un buen paso adelante. TUED surgió para dar respuesta a la agenda promercado de la 'economía verde' promovida en el contexto de la Cumbre de Río+20, en 2012. Los sindicatos reunidos en Río decidieron impulsar una visión

distinta, que se basara en reclamar que la energía volviera a la esfera pública. La TUED aglutina a diversos sindicatos de todo el mundo, que abogan por un ideal de "resistir, recuperar, reestructurar": resistir a la agenda de los combustibles fósiles de las empresas transnacionales, recuperar la energía en el ámbito público y reestructurar el sector para dar paso a una energía renovable, asequible y sometida a un control democrático.

La TUED tiene por objetivo fomentar la democracia energética como una prioridad normativa básica y, al mismo tiempo, desarrollar la práctica de la democracia energética sobre el terreno. Aunque la TUED está integrada principalmente por sindicatos del Norte, cada vez están más implicados en ella sindicatos de Sudáfrica, Brasil, Argentina, India, Nepal y Corea, entre otros países. Sean Sweeney, coordinador de la iniciativa, explicó que los sindicatos de la TUED han participado en algunos proyectos y victorias impresionantes en los últimos años, desde conseguir una moratoria sobre el fracking a contribuir a la campaña contra el oleoducto Keystone XL –un proyecto que rechazó recientemente el presidente Obama– o formar parte de la nueva alianza Switched On London en el Reino Unido.

Algunos de los procesos más interesantes en torno a cuestiones de energía han tenido lugar en Sudáfrica, país en el que el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (NUMSA) desempeña un papel fundamental. El NUMSA –y la campaña a favor de un millón de empleos ‘verdes’– ha conseguido importantes avances en ámbitos como el acceso a la energía,

*Activistas de todo el mundo están intentando definir los principios por los que se debería regir un sistema energético justo, progresista y sostenible. Algunas organizaciones hablan de democracia energética, mientras que otras prefieren llamarla justicia energética o soberanía energética. Creo que quedan discusiones pendientes para resolver qué es lo que entendemos cuando proponemos estos conceptos, pero considero que estamos convergiendo hacia una perspectiva común de la transición energética que necesitan impulsar las personas y el planeta.*

**Victor Menotti (International Forum on Globalization)**

asegurando unidades básicas gratuitas de electricidad y haciendo frente a medidas de privatización. Sin embargo, Dinga Sikwebu, coordinador del Frente Unido del NUMSA, señala que el trabajo en torno a la energía siempre ha sido intermitente, debido a los ritmos de los procesos sindicales. A diferencia de otras luchas, como las centradas en el salario, que siempre prevalecen como un componente central de la actividad del movimiento sindical, los temas relacionados

con la energía no se consideran tan relevantes y, por lo tanto, exigen una capacidad adicional para mantener una línea coherente.

Que una de las iniciativas sindicales más exitosas en torno a una transición justa y la democracia energética sea algo fragmentaria es muy elocuente. En general, la relación entre el movimiento obrero y la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono tiende a ser bastante ambigua. Y aunque la TUED ha sido bien recibida por muchos grupos, en algunos casos también se ha topado con resistencias. De hecho, en muchas ocasiones los sindicatos se han mostrado abiertamente hostiles a la agenda que aboga por rebajar las emisiones de carbono. En Alemania, por ejemplo, las recientes protestas contra las minas de lignito se encontraron con la resistencia activa de los principales sindicatos.

Para David Boys, de la Internacional de Servicios Públicos, el problema está en que el sector de la energía convencional ofrece puestos de trabajo que, aunque a menudo son peligrosos, están muy bien pagados. El actual modelo de producción centralizada implica grandes concentraciones de trabajadores en un mismo lugar de trabajo, un modelo que normalmente ha dado lugar a un alto nivel de sindicación y, por ende, a un fuerte poder de negociación. El sector de las energías renovables, en cambio, es algo así como un terreno desconocido. Actualmente, los empleos en las renovables tienden a ser poco seguros y no sindicalizados, y el giro hacia modelos de generación más descentralizados amenaza con socavar los beneficios que garantiza la alta densidad de concentración de los trabajadores.

Teniendo en cuenta que la principal preocupación de los trabajadores es la seguridad laboral, no resulta sorprendente que la respuesta a la agenda que persigue una economía baja en emisiones de carbono muchas veces sea tibia.

Por lo tanto, la cuestión de la transición justa sigue siendo un reto. Queda mucho por hacer, desde fomentar la sindicalización en el sector de las energías renovables hasta desarrollar planes concretos para financiar una reconversión industrial. A la hora de elaborar planes de transición, Hilary Wainwright, del TNI, sugiere que nos inspiremos en el ejemplo de la plantilla de Lucas Aerospace en la década de 1970. Frente a la amenaza de un despido en masa, los trabajadores de la empresa –cuyos empleos estaban

fundamentalmente vinculados con la producción de piezas para equipos militares– desarrollaron un plan alternativo, en el que formularon recomendaciones para aplicar sus habilidades y conocimientos a tecnologías de utilidad social. Quienes abogamos por la democracia energética deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para movilizar los conocimientos del sector de la energía y lograr la democratización que deseamos.

## 6. El camino por delante

En este informe hemos analizado algunos de los aspectos problemáticos a los que se enfrentan los movimientos sociales y los investigadores que estamos trabajando en torno a la democracia energética, examinando desde la relación con el poder del Estado a la solidaridad con las luchas contra la colonización y las paradojas de una transición justa. Las siguientes cuestiones podrían orientar un programa de investigación compartido para seguir explorando vías para avanzar juntos:

- *Democratización de la tecnología:* El sector de la energía está cambiando rápidamente, con nuevas opciones tecnológicas para desarrollar una nueva generación de baterías, redes y contadores inteligentes. Estas nuevas tecnologías prometen transformar nuestra relación cotidiana con la energía. Nuestro consumo energético está cada vez más controlado, más calculado y es más sensible a los cambios en el suministro. Podemos prever que estas nuevas tecnologías desempeñarán un papel importante en la transición hacia una economía totalmente renovable. Sin embargo, en estos momentos, son las empresas multinacionales las que están probando y promoviendo estas tecnologías, acentuando así la preocupación por temas como el acceso y la asequibilidad, así como la propiedad de los datos y la información generada a partir de las nuevas tecnologías inteligentes. Quienes abogamos por la democracia energética deberíamos ponernos al día en materia de novedades tecnológicas con el fin de crear una agenda alternativa con respecto a su propiedad, control y uso.
- *Democratización de las grandes empresas públicas de servicios:* En el momento en que quienes abogamos por la democracia energética dirigimos nuestra atención al Estado, se acentúa la importancia de la cuestión de cómo conseguir que las grandes empresas de servicios públicos mantengan un control democrático y garanticen la rendición de cuentas. La corporatización de las empresas públicas supone un motivo importante de preocupación, como ejemplifican los casos de Eskom en Sudáfrica y Vattenfall en Suecia.
- *Gestión pública progresista:* Como explicó Ioannis Margaritis (vicepresidente de la operadora de la red de distribución eléctrica de Grecia), cuando Syriza asumió el poder de las instituciones estatales en Grecia, el nuevo gobierno heredó una arquitectura y una cultura institucional profundamente neoliberales. En muchos países, las entidades públicas están dirigidas por gerentes con una mentalidad puramente empresarial, y gestionadas de forma muy jerárquica y burocrática. Dar marcha atrás en este proceso representa una ingente

tarea, y reconstruir una nueva cultura institucional otro gran desafío. ¿Qué características tendría una agenda progresista para la gestión pública?

- *Democracia energética y comercio:* Actualmente se está expandiendo una nueva ronda de acuerdos de libre comercio, como el TISA (Acuerdo de Comercio de Servicios) y el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión). Estos tratados comerciales persiguen consolidar el poder corporativo y la gobernanza neoliberal. Entre otras cosas, conceden a las grandes empresas el derecho a demandar a los gobiernos por medidas que el capital considere que podrían limitar las ganancias o amenazar la propiedad privada, como la moratoria sobre la extracción de combustibles fósiles o la decisión de revertir una privatización. La disposición relativa a la neutralidad tecnológica en el TISA limitaría la capacidad de los Estados para distinguir entre fuentes de energía altas y bajas en emisiones de carbono. En caso de aprobarse, estos tratados comerciales representarían un gran obstáculo para la democracia energética. Por ello, debemos investigar las repercusiones específicas de estos nuevos acuerdos comerciales para la democracia energética y forjar alianzas con los movimientos por un comercio justo.
- *Estudios de caso sobre democracia energética:* Debemos recopilar estudios de caso centrados en la democracia energética, en especial en el Sur Global. Además de construir una base de conocimientos sobre las iniciativas de democracia energética que han funcionado bien, también debemos tener en cuenta los casos en los que la democracia energética no ha despegado, con el fin de extraer las lecciones pertinentes.
- *Democracia energética y justicia climática:* A medida que el movimiento por la justicia climática se hace cada vez más fuerte, ¿cómo se puede conectar nuestra agenda por la democracia energética con la justicia climática, de forma que ambas luchas se apoyen mutuamente? ¿Cómo puede el fomento de la democracia energética fortalecer a los movimientos por la justicia climática?
- *Financiación:* Partiendo del trabajo de grupos como Plataforma en el Reino Unido, debemos pensar con mayor detenimiento en cómo el capital que se deje de invertir en combustibles fósiles se podría reinvertir de forma que promueva la democracia energética. Necesitamos nuevas ideas en torno a las posibilidades de financiación pública como una alternativa a las asociaciones público-privadas (APP o PPP). También necesitamos diseñar estrategias de financiación concretas y viables para las iniciativas que persiguen una transición justa.
- *Comprensión de la arquitectura global del sector energético:* Necesitamos construir bases de datos más completas y detalladas sobre el sector de la energía y las formas de interconexión a escala global, así como desarrollar un entendimiento más sofisticado de las formas en que éste se ve afectado por factores tales como la geopolítica, los avances tecnológicos o la regulación de la infraestructura.



- *Energía, securización y militarización:* Teniendo en cuenta que los vínculos entre energía, securización y militarización se están convirtiendo en un tema geopolítico cada vez más importante, debemos plantearnos de qué forma influye este telón geopolítico en la democracia energética y las cuestiones que la rodean. Por ejemplo, ¿cómo podríamos abordar la creciente popularización del marco de la 'seguridad energética', dados los vínculos entre esta agenda y el concepto de seguridad nacional? ¿Podría la formación de nuevas alianzas entre la democracia energética y los movimientos antimilitaristas proporcionar un terreno fértil para seguir adelante?
- *Vinculación de la democracia energética con otras luchas:* Como lo sugiere este informe, las cuestiones de energía están estrechamente relacionadas con otra serie de cuestiones, que van desde las finanzas a la geopolítica. En el taller, Dinga Sikwebu comentó que las luchas articuladas en torno a la transición energética deben interconectarse de manera más explícita y destacó, a modo de ejemplo, que es necesario entender el sector energético de Sudáfrica en el contexto del complejo mineral-industrial del país. Así pues, ¿cómo se pueden establecer alianzas entre diferentes luchas, de tal manera que la democracia energética no se queden en una especie de compartimento aislado como si fuera un tema separado del resto?

Empezar a ampliar nuestra base de conocimientos en esta dirección será de vital importancia para el futuro de nuestra lucha. Pero es evidente que no podemos esperar ganar la batalla solo con buenos estudios y argumentos. Como señalamos en nuestra discusión inicial, para que la transición energética emancipadora pueda prosperar, se necesitan estrategias políticas concretas. Debemos pensar en generar poder.

Las luchas en torno a la privatización del agua que triunfaron en el pasado nos proporcionan un punto de partida para la reflexión. En este contexto, una red internacional formada por comunidades locales, movimientos sociales y académicos progresistas resultó ser una base organizativa eficaz para intercambiar conocimientos y recursos. El movimiento por la justicia del agua ha combinado las luchas locales con la promoción de políticas nacionales e internacionales apropiadas, actividades de sensibilización y oposición a la privatización, generando un creciente apoyo a la idea de agua pública. Algunos hitos de la lucha –de los que quizá el más memorable ha sido la 'Guerra del Agua' en la ciudad boliviana de Cochabamba– resultaron ser cruciales para construir la solidaridad y el impulso necesarios a nivel internacional. Una cuestión interesante para el ámbito de la democracia energética es dónde podrían surgir hoy esos hitos en la lucha, y cómo se podrían capitalizar.

A pesar de todo, aunque sea útil realizar análisis comparativos entre ambos ámbitos, la energía no es lo mismo que el agua. La energía ocupa un papel fundamental en el capitalismo global de una forma totalmente distinta al agua. Sin embargo, a diferencia del agua, la energía no es algo que podamos ver o tocar, por lo que es una presencia menos tangible en nuestra vida cotidiana. Nuestras luchas en torno a la energía deben dar un salto hacia arriba –al ámbito de las relaciones globales de poder– y también hacia abajo, a los ritmos diarios de uso y consumo. No debemos reificar la energía como

algo que deba entenderse de manera aislada, sino más bien pensar en cómo los patrones de producción, distribución y uso están determinados por las relaciones de poder que operan en distintas escalas y sectores; y viceversa, cómo esas relaciones de poder y sectores están determinados por la energía. En consecuencia, el movimiento por la democracia energética debe poner en marcha nuevas iniciativas para democratizar otros aspectos de la vida social, desde el lugar de trabajo a las instituciones financieras, los alimentos y la salud.

Esta fue, en efecto, una de las lecciones que compartió Ioannis Margaritis. En opinión de Ioannis, sus esfuerzos para elaborar un plan de energía progresista para Grecia después de la elección de Syriza se vieron profundamente afectados por una serie de factores que iban más allá de la energía y, de hecho, más allá de la escala del Estado nacional. Pese a las

contradicciones de la experiencia de Syriza, el incremento de los proyectos electorales de izquierda en toda Europa ofrece, sin duda, una interesante coyuntura para quienes abogan por la democracia energética.

*Lo que están diciendo los artífices del TTIP y de tratados parecidos es: 'Lo siento; no puedes decidir políticamente que tendrás energías renovables o energías con cero emisiones. Porque la prioridad es proteger nuestras inversiones y nuestras ganancias'. Es así de sencillo. Se trata de proteger la capacidad de los inversores para determinar el futuro de nuestros países, nuestro planeta, nuestros sistemas de energía, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de educación.*

**David Boys (ISP)**

Si nuestro objetivo es trascender los éxitos a escala micro y lograr la transformación del sector de la energía en su conjunto, la planificación estatal será esencial. Por lo tanto, el ascenso de los partidos de izquierda brinda una oportunidad que no podemos desperdiciar. Tanto los responsables de formular políticas como los mismos políticos están buscando políticas de energía progresistas. Debemos ofrecerles una visión audaz pero concreta para construir la democracia energética en el aquí y el ahora.

No obstante, la discusión sobre el Estado en este informe pone de relieve las dificultades que esto entraña, inevitablemente. Aunque no podemos permitirnos romper con los nuevos partidos de izquierda, tampoco debemos depositar todas nuestras expectativas en esa dirección. Los partidos de izquierda no generarán un cambio transformador sin unos fuertes movimientos de base dispuestos a movilizarse cuando las agendas emancipadoras se desvíen del curso que deberían seguir, y a unirse en su defensa contra la inevitable embestida del capital transnacional. Por lo tanto, una vez más, volvemos a la cuestión de cómo construir poder social, forjar nuevas alianzas y evaluar dónde se podrían encontrar las grietas o los puntos débiles del orden dominante, y la mejor forma de sacarles provecho.

## Referencias

- Angel, J. (2016). *Strategies of energy democracy*. Bruselas: Rosa Luxemburg Stiftung.
- Casaravilla, G. (2014). 'Energía Eléctrica en el Uruguay'. Presentación en las Jornadas de Ingeniería Matemática. Montevideo, 18 de febrero.
- Harvey, D. (2015). *Ciudades rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal.
- Jessop, B. (1982). *The Capitalist State. Marxist Theories and Methods*. Oxford: Martin Robertson.
- Lohmann, L. y Hildyard, N. (2014). *Energy, Work and Finance*. Dorset: The Corner House.
- Mitchell, T. (2011). *Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil*. Londres y Nueva York: Verso.

## Participantes en el taller

- **Alberto Cortes Ramos**, Universidad de Costa Rica
- **Alfredo Ramos**, Asesor Técnico, Podemos Madrid
- **Anna Galkina**, Switched on London
- **Benny Kuruvilla**, Transnational Institute
- **Brian Ashley**, Alternative Information and Development Centre
- **Claus-Dieter König**, Rosa Luxemburg Foundation Brussels Office
- **Daniel Chavez**, Transnational Institute
- **David Boys**, Internacional de Servicios Públicos
- **David McDonald**, Municipal Services Project
- **Dinga Sikwebu**, National Union of Metal Workers of South Africa
- **Dorothy Guerrero**, Focus on the Global South
- **Edgardo Lander**, Transnational Institute
- **Fiona Dove**, Transnational Institute
- **Hilary Wainwright**, Transnational Institute
- **Ioannis Margaris**, Hellenic Electricity Distribution Network Operator
- **James Angel**, Switched On London
- **José Deras**, Banco Centroamericano de Integración Económica
- **Joseph Wilde-Ramsing**, Centre for Research on Multinational Corporations
- **Kolya Abramsky**, Investigador independiente
- **Lavinia Steinfort**, Transnational Institute
- **Lyda Fernanda Forero**, Transnational Institute
- **Marlis Gensler**, Rosa Luxemburg Foundation Brussels Office
- **Matthijs Peters**, Transnational Institute
- **Mika Minio-Paluello**, Platform London
- **Myriam Vander Stichele**, Centre for Research on Multinational Corporations
- **Nick Buxton**, Transnational Institute
- **Nick Dearden**, Global Justice Now
- **Pablo Cotarelo**, Investigador independiente
- **Satoko Kishimoto**, Transnational Institute
- **Sean Sweeney**, Trade Unions for Energy Democracy
- **Sebastián Torres**, Director Nacional de Planificación, Gobierno del Uruguay
- **Stefan Taschner**, Berliner Energietisch
- **Susan Spronk**, Municipal Services Project
- **Tomislav Tomasevic**, Institute for Political Ecology
- **Victor Menotti**, International Forum on Globalization

Alrededor del mundo, la ciudadanía está recuperando el control sobre el sector de la energía, combatiendo la ley del mercado y reinventando nuevas formas de producir, distribuir y usar la energía. Esta nueva realidad se puede percibir en las nuevas formas de articulación en torno a principios que van desde el acceso a la energía a la justicia climática, pasando por la lucha contra las privatizaciones y los derechos de los trabajadores. Para muchos de los movimientos sociales implicados en las luchas en torno a la energía, el concepto de democracia energética está resultando ser cada vez más útil como un medio para aglutinar causas dispares pero claramente interrelacionadas en un discurso compartido, habilitando así la construcción de una agenda común.

La democracia energética no tiene una definición unívoca. Sin duda, el término evoca el anhelo de un control colectivo sobre el sector de la energía, en contraposición a las ideas neoliberales a favor de la comercialización, la individualización y el control empresarial privado. La democracia energética aspira a poner en manos de los usuarios y los trabajadores de la energía el poder sobre todos los aspectos del sector, desde la producción, la distribución y el suministro a la financiación, la tecnología y el conocimiento. Los movimientos sociales que están desplegando el concepto de democracia energética también reivindican un sistema de energía socialmente justo, entendido como un sistema de acceso universal, con precios justos y con puestos de trabajo dignos, sindicalizados y bien remunerados. Proponen un sistema de energía que funcione en el interés público y en el que primen los objetivos sociales y ambientales por encima del ánimo de lucro. Y persiguen una transición en las formas de generación de energía que de prioridad fundamental a las fuentes renovables.

